

América Latina es la única región del mundo donde ha disminuido la desigualdad y se ha extendido la participación democrática bajo una serie de gobiernos «bolivarianos» o, en términos generales, socialdemócratas, elegidos a partir de 1999: Chávez en Venezuela, Kirchner y Fernández en Argentina, Morales en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay, los sandinistas en Nicaragua, y Humala en Perú. La victoria obtenida por Rafael Correa en Ecuador en 2006 fue una pieza central de esta secuencia que confirmó el avance regional de la izquierda y amplió el repertorio de las formas políticas que esta podría adoptar. En el caso de Correa, como en otros, el camino hacia el poder pasó por las ruinas del orden político anterior. Tras la espiral de endeudamiento de la década de 1980 y los experimentos neoliberales de la de 1990, Ecuador sufrió un colapso económico de enorme intensidad en 1999-2000. El sistema de partidos había mostrado una inestabilidad crónica, cuyo resultado fue que en diez años pasaran por el Palacio de Carondelet seis presidentes. Durante el mandato de Correa se han desencadenado, como ha sucedido en otros procesos bolivarianos, una serie de procesos democráticos y constitucionales; se han puesto en marcha medidas de redistribución de la riqueza; se ha reafirmado la soberanía económica nacional en lo que se refiere a la deuda externa y los recursos naturales y se han rechazado las imposiciones del FMI y del Banco Mundial. Sin embargo, Ecuador presenta ciertas particularidades que no se encuentran en el resto del continente. Ante todo, los indígenas tienen menos peso que en Bolivia o Perú, y Alianza País, que engloba a treinta partidos y movimientos, probablemente sea una alianza gobernante más heteróclita que las existentes en otros lugares. El gobierno de Rafael Correa fue el primero en el mundo en someter la deuda nacional a una auditoría pública y transparente. Correa fue reelegido en 2009 tras la aprobación de la nueva Constitución el año anterior; y ya lleva más tiempo en el poder que cualquier otro presidente ecuatoriano desde el siglo XIX, siendo lo más probable que renueve su mandato tras las elecciones que se celebrarán a principios de 2013. Aunque la derecha ha arremetido sin tregua contra su gobierno, los candidatos rivales están entre un 45 y un 60 por 100 por detrás en las encuestas (por otro lado no muy fiables). Su principal rival es Guillermo Lasso, un banquero de Guayaquil, miembro del Opus Dei, que cuenta con una intención de voto del 15 por 100; le siguen, ambos por debajo del 10 por 100, Lucio Gutiérrez, el presidente derrocado en 2005 tras un levantamiento popular, y Alberto Acosta, antiguo ministro del gobierno de Correa, del que se distanció en junio de 2008 debido, en parte, a la cuestión de la extracción de recursos naturales en las zonas indígenas. ¿Cuál es el balance del gobierno de Correa y cómo responde a esas críticas? En esta entrevista, realizada tras el asunto Assange, Correa habla de su formación, de las políticas sociales y económicas defendidas por su gobierno y de los dilemas ecológicos a los que se enfrenta su país.

Entrevista

LA VÍA DEL ECUADOR

¿Nos podría decir algo sobre su formación personal y política?

Nací en la ciudad de Guayaquil, la más grande y problemática del país. Durante 20 años –desde los 5 a los 24, es decir, desde los primeros recuerdos de mi niñez– viví en el mismo barrio, peligroso y duro. Mi padre provenía de una familia paterna de «abolengo» y de una madre de origen campesino e hija ilegítima. Nació en la hacienda Palmar, la más grande de la provincia de Los Ríos, hacienda propiedad de la familia Correa. Mi abuelo paterno, todo un bohemio, quebró la hacienda y a los 5 años mi padre se encontró en la miseria y, más aún, con sus padres divorciados y sin que se le permitiera ver a su madre de origen humilde. Mi madre provenía de una familia de clase media de origen manabita, sin mayores problemas familiares pero sí con muchas limitaciones económicas. Mi madre no pudo acabar sus estudios en el colegio por tener que trabajar para ayudar a su familia, y mi padre, un hombre sumamente inteligente, tampoco los concluyó por los mencionados problemas económicos y familiares. Sin embargo, paradójicamente siempre nos inculcaron el amor por el estudio. Ambos eran empleados privados, que ganaban sueldos bajos y se enfrentaban a condiciones laborales inestables, por lo que nuestra familia era bastante pobre, y solo pudimos estudiar en buenos colegios gracias a becas de excelencia académica. Fuimos cuatro hermanos: Fabricio, Pierina, yo y mi hermana Bernardita, que murió cuando yo tenía apenas 13 años y ella 12; su muerte todavía es el golpe más duro que he recibido en mi vida. Cuando tenía 8 años mis padres se divorciaron, por lo que básicamente me crié con mi madre, una trabajadora incansable. Poco tiempo después, ella encontró trabajo como jefa de cajeras en la principal cadena de supermercados de la ciudad; era un trabajo durísimo que incluía sábados, domingos y días feriados y en el que estuvo cerca de 20 años, pero gracias a ese trabajo tuvimos la mejor comida en casa. Es decir, pese a que siempre vivimos en una casa alquilada de madera y cemento y el cuarto que compartía con mi hermano ni siquiera tenía puerta, mis padres me dieron lo mejor que podían darme: salud y educación.

Mi formación se fundamenta en la teología de la liberación y en la doctrina social de la Iglesia. Fui militante en la Universidad Católica de Guaya-

quil de un grupo de izquierda de la Facultad de Economía. Ganamos la Federación de Estudiantes por primera vez en la historia de una universidad que es una de las más conservadoras de Ecuador en una época muy dura, la del gobierno de Febres Cordero, un gobierno de derecha muy represivo¹. Luego fui a hacer un año de voluntariado, de trabajo social, en Zumbahua, una región indígena a 3.600 metros de altitud y, después de eso, obtuve una beca para estudiar en el extranjero. En Europa, en Lovaina la Nueva, también participé en la política estudiantil, pero ahí me casé; después hice un doctorado en Estados Unidos. Aunque siempre mantuve mis convicciones de izquierda, no tuve participación activa en política. Yo creo que uno de los errores de la llamada «izquierda radical» es que considera que uno no es militante de izquierda, si no ha militado en su seno; pero eso es prepotencia. En verdad, había muchos espacios en los que la izquierda podía participar y formarse, y uno de esos espacios es la teología de la liberación y la doctrina social de la Iglesia.

Ecuador atravesó por una crisis económica en 1999-2000, seguida de un periodo de inestabilidad política. Se expulsó del gobierno a los presidentes Mahuad y Gutiérrez en 2000 y 2005, respectivamente, y quienes les sucedieron ocuparon la presidencia del país en ambos interregnos sin haber sido elegidos para ello. ¿Cómo se unió al gobierno del sucesor de Gutiérrez en 2005?

Muy rara vez, y de forma voluntaria, yo asesoraba al vicepresidente de la República, Alfredo Palacio². Nunca me había encontrado con él, pero manteníamos contacto a través de un amigo común, Rubén Barberán, a quien conocía de la militancia de izquierda estudiantil³. Le preparé al vicepresidente diversos trabajos sobre la dolarización y los fondos petroleros que fueron muy bien recibidos. Cuando cae Gutiérrez y él asume la presidencia, me propone que me haga cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Qué le hizo presentarse a las elecciones presidenciales de 2006?

En el cortísimo tiempo que estuve en el Ministerio de Economía, alrededor de cien días, demostramos que no se tenía que hacer lo mismo de siempre: someterse al Fondo Monetario y al Banco Mundial, pagar la deuda externa independientemente de las deudas sociales pendientes. La ciudadanía tenía grandes expectativas. Cuando yo renuncié al cargo, y probablemente por primera vez en la historia de este país, hubo manifestaciones de apoyo al ministro de Economía. Mi plan inicial era volver a mi cátedra de la Universidad San Francisco de Quito; ya estaban inscritos los

¹ León Febres Cordero fue presidente del Ecuador entre 1984 y 1988 por el Partido Social Cristiano. En mayo de 2008, Correa creó una comisión para investigar la tortura, desaparición y ejecución sumaria de opositores, supuestamente a manos de los escuadrones de la muerte del gobierno en la década de 1980. [Notas: NLR].

² Alfredo Palacio fue vicepresidente de Lucio Gutiérrez entre 2003 y 2005, y asumió la presidencia cuando este último fue depuesto en abril de 2005.

³ Rubén Barberán fue ministro de Bienestar Social durante el gobierno de Palacio.

chicos, pero me despidieron antes de que comenzara el curso alegando que yo era un político. En ese momento un grupo de colaboradores, básicamente Ricardo Patiño, me dijo que no podíamos desilusionar a la gente y dejar sin colmar las expectativas que habíamos creado⁴. «Recorramos el país, creemos conciencia y formemos un movimiento político para conquistar la presidencia», dijo. Porque teníamos claro que, para cambiar Ecuador, había que conquistar el poder político.

¿Cuándo empezaron a llamar a este proceso la «Revolución Ciudadana»?

Durante la campaña teníamos claro que lo que proponíamos era una revolución, entendida como el cambio radical y rápido de las estructuras vigentes, para transformar al Estado burgués en un Estado verdaderamente popular. Frente a la deslegitimación de la clase política —que no representaba a nadie excepto a sí misma—, decidimos ponerle el nombre de Revolución Ciudadana, de ciudadanos indignados. Nuestra revolución se anticipó en cinco o seis años al movimiento de los indignados que se está dando en Europa. Esta revolución también es profundamente bolivariana, sobre todo en lo que atañe a la integración regional. Y también nos inspira la revolución liberal de Eloy Alfaro, la única revolución verdadera antes de la nuestra que había ocurrido en el país. Por eso Alfaro fue asesinado en 1912, de forma bárbara, porque realmente cambiaba las estructuras de del país de entonces⁵.

Usted accedió al poder a principios de 2007. Ese mismo año la economía mundial se vio sacudida por el colapso del crédito que desembocaría en la crisis financiera de 2008. ¿Qué impacto tuvo en Ecuador y cómo afrontó su gobierno el problema?

La crisis a nosotros nos golpeó por partida triple. Aparte de las consecuencias normales de una crisis —pérdida de mercados de exportación, disminución del financiamiento, etcétera—, se acabaron las remesas de inmigrantes, que es lo que mantenía al país desde la crisis de 1999 hasta la llegada de nuestro gobierno. Y se derrumbó el precio del petróleo, otro puntal esencial de nuestra economía nacional. En 2009 América Latina decrece un 2 por 100, mientras que nuestro crecimiento fue pequeño,

⁴ Ricardo Patiño, fundador de la rama ecuatoriana de Jubileo 2000, fue subsecretario de Economía en 2005, cuando Correa ocupaba dicha cartera ministerial; durante los mandatos de Correa ha sido ministro de Economía, ministro de Coordinación de la Política y desde enero de 2010 es ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.

⁵ Eloy Alfaro (1842-1912) fue el líder de la revolución liberal ecuatoriana de 1895. En sus dos mandatos como presidente (1895-1902 y 1906-1911), promulgó una serie de reformas modernizadoras como la separación entre Estado e Iglesia, la redistribución de la tierra, la creación de instituciones de educación primaria, la condonación de las deudas o la construcción del ferrocarril. Las elites, compuestas por terratenientes conservadores y la Iglesia, mostraron su firme oposición a ellas. En medio de desórdenes ciudadanos, él y otros liberales fueron ejecutados de forma sumarisima, sus cuerpos fueron arrastrados por la ciudad de Quito y quemados públicamente.

menos de un 1 por 100, pero positivo. Lo que, modestia aparte, es mucho más significativo considerando que nuestra economía estaba dolarizada desde el año 2000 y habíamos perdido un instrumento fundamental de la política económica. ¿Cómo lo hicimos? Actuando con mucha pericia económica en función del bien común, en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio del capital financiero. Por ejemplo, teníamos un Banco Central autónomo, una de las mayores trampas del neoliberalismo para que, independientemente del gobierno que haya, todo siga igual. Gracias a la Constitución de 2008 dejó de ser autónomo. Aprovechamos las pocas ventajas que ofrece la rigidez de un sistema dolarizado, por ejemplo que no exige reservas para respaldar la moneda nacional. El Banco Central, cuando era autónomo, gestionaba miles de millones de dólares generados por el ahorro nacional (el mayor ahorrador es la Seguridad Social) y los mandaba al exterior, a Florida. Como el Banco Central dejó de ser autónomo, pudimos recuperar esas reservas para el país e inyectarlas en la economía nacional, lo cual se convirtió en una importante fuente de dinamización de la economía. En el caso de la banca privada, que también mandaba todo el dinero fuera, introdujimos el coeficiente de liquidez doméstica; la obligamos a repatriar ese dinero al país. Buscamos otras fuentes de financiamiento, sobre todo de China. Todo esto nos permitió tomar medidas contracíclicas para paliar los efectos de la crisis y no disminuir la inversión pública, sino incluso aumentarla. Este cóctel de medidas nos permitió crecer en 2009 y, según la CEPAL, ser uno de los países que más rápidamente se ha recuperado de la crisis, siendo el año pasado uno de los tres países que más crecieron en América Latina.

¿Qué ventajas y desventajas ha supuesto la dolarización decretada por el presidente Mahuad en enero de 2000?

La dolarización significó el suicidio monetario del Ecuador, pero no, como en Europa, para adoptar una moneda común, sino para adoptar una moneda extranjera. En consecuencia, gran parte de nuestra suerte económica dependía de que la política monetaria estadounidense coincidiera con las necesidades del país, lo cual ha sucedido en gran medida durante estos años. A nosotros nos ha favorecido que se haya debilitado el dólar. Por supuesto, los países que no tienen como moneda nacional el dólar tienen problemas: apreciación real de su moneda, pérdida de competitividad en sus exportaciones, etc. Pero hay que saber distinguir entre la buena suerte y las buenas políticas. La dolarización fue una medida totalmente equivocada. Dentro de esa equivocación hemos tenido algo de suerte.

Usted creó en 2008 una comisión para auditar la deuda pública del Ecuador que, cuando accedió al poder, alcanzaba los 10.300 millones de dólares, algo más de la cuarta parte del PIB. ¿Qué idea latía tras esta medida y qué efectos tuvo?

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país era el coste de la deuda externa. Llegó a consumir el 40 por 100 del presupuesto; se gas-

taba el triple en pagar la deuda que en inversión social, educación, salud, etcétera. La asignación de recursos demuestra quién manda en la sociedad: los banqueros, los acreedores, las instituciones financieras internacionales. Coordinamos la creación de una comisión auditora de la deuda, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC); fue la primera comisión de este tipo en América Latina creada por iniciativa de un gobierno (se había hecho antes, pero por iniciativa de la sociedad civil). Esa Comisión demostró, sin lugar a dudas, lo que ya sabíamos: el atraco, la inmoralidad que había sido la deuda externa. Por ponerle un ejemplo, en el mercado secundario los bonos Global 2012 y 2030 se negociaban al 30 por 100, pero la renegociación siempre se hacía en función de su valor nominal total: el 100 por 100. Se descubrieron cosas atroces en los documentos que firmaron los supuestos abogados del país, corrupción pero también conflicto de intereses. Ante todo esto, en diciembre de 2008 la Comisión declaró inmoral esa deuda y, en consecuencia, se tomó la decisión política de declarar una moratoria unilateral. Esto lo hicimos en un momento de bonanza económica, con un precio del petróleo alto, incremento de las exportaciones, etcétera. Fue una decisión deliberada que hizo descender los valores de la deuda, lo cual obligó a negociar a los acreedores y a vender sus bonos, para lo cual utilizamos la modalidad de la subasta holandesa. Logramos recobrar nuestra deuda a un valor del 32-33 por 100, lo que significó miles de millones de ahorro para el pueblo ecuatoriano, tanto en capital como en pago de intereses. Este ahorro liberó muchísimos recursos para dedicarlos al gasto y a la inversión social. Ahora la relación se ha invertido: invertimos tres veces más en salud, educación, vivienda, etcétera, que en el pago de la deuda.

Los procesos constitucionales populares han sido un rasgo común de los gobiernos reformistas bolivarianos de izquierdas de América Latina a lo largo de la pasada década. ¿Qué forma adoptó ese proceso en Ecuador y qué problemas sociales y políticos quiso solucionar la Asamblea Constituyente de 2008?

La convocatoria de la Asamblea Constituyente fue nuestra respuesta al grito de «¡Que se vayan todos!» de la insurrección popular —«forajida»— que derrocó al gobierno de Lucio Gutiérrez en 2005. Quisimos concretarlo en forma radical pero democrática y constitucional. Los actores y partidos que nos habían gobernado desde 1979 carecían de legitimidad democrática. Pretendíamos fijar las bases de un nuevo pacto de convivencia que permitiera al país salir del neoliberalismo, recuperar la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos y relanzar al Estado al primer plano de la coordinación social. La convocatoria de una Asamblea Constituyente permitió que la gente rápidamente confiara en nosotros, a pesar de que no teníamos un partido organizado, y también recuperar el valor de la palabra como parte sustantiva de la vida política de un país. Por eso obtuvimos el apoyo del 80 por 100 de la ciudadanía en el referéndum que permitió crear la Asamblea Constituyente. Esa fue la primera gran derrota de la derecha y las fuerzas reaccionarias del país.

Una vez instalada la Asamblea, el reto era inmenso. Se trataba de delinear las bases constitucionales en que reposaría nuestra acción gubernativa y la acción del Estado y la sociedad durante las próximas décadas. No hemos sido tan irresponsables como para pensar que esa Constitución solo le serviría a nuestro gobierno. Se trató de un pacto intergeneracional para forjar el Ecuador del presente y del futuro. El proceso constituyente ha sido, en este sentido, la batalla política más trascendental que hemos dado en estos cinco años de gobierno. Desde esta perspectiva yo valoro, en lo fundamental, dos cuestiones: la Constitución la hicimos los ecuatorianos pensando desde Ecuador y para la ciudadanía que aquí reside. Nos inspiramos en diversos ideales democráticos y experiencias populares presentes en la escena global, pero el texto es una respuesta nacional a nuestros problemas y utopías concretos. A la vez, fuimos altamente innovadores y creativos con las propuestas delineadas en el horizonte de la constituyente. Ideas como los «derechos de la naturaleza», «la ciudadanía universal», el Ecuador como un «territorio libre de bases militares extranjeras», entre otras, son ideas forjadas al calor de los debates entre nuestros asambleístas y la sociedad. Quizá fuimos ingenuos o excesivamente idealistas en algunas cuestiones, pero de eso se trata también en todo proceso constituyente, de producir un horizonte de aspiraciones que nos permita imaginarnos como país en el marco de un proyecto colectivo que nos cohesiona y nos traza un camino.

El procedimiento constitucional fue, pues, una deliberación colectiva que logró producir un pacto de convivencia forjado desde nuestra específica experiencia política, en relación a nuestros problemas como nación y bajo el reconocimiento de una serie de nuevos derechos, garantías e instituciones que, en el marco de los grandes principios de la revolución democrática moderna, suponen una respuesta política endógena, autodeterminada e imaginativa al proyecto de una nación soberana, inserta en el planeta y en la región del Sur global. Quizá el ejemplo más preciso de todo esto es lo que la Carta Magna denomina «muerte cruzada»: una institución propia de los regímenes parlamentarios, si bien nuestro sistema político es presidencialista, que permite que en caso de pugnas entre los dos principales poderes del Estado (ejecutivo y legislativo) el uno pueda solicitar el cese de funciones del otro teniendo como consecuencia la convocatoria inmediata a elecciones generales para ambos poderes del Estado. Se trata de un arreglo que permite una salida institucional a las recurrentes crisis políticas del país. No debemos olvidar que entre 1996 y 2005 ningún presidente logró culminar el periodo por el que fue electo y tres de ellos fueron derrocados en medio de grandes movilizaciones sociales. Fue al calor del debate constitucional de 2007-2008 que pudimos encontrar este tipo de arreglos institucionales «propios» que, entre muchos otros, nos permiten sostener que estamos en un proceso democrático entendido como la capacidad de los pueblos para diseñar las instituciones que les permiten autogobernarse.

Pudimos avanzar entonces en la reconstrucción del Estado tras el aluvión neoliberal que había hecho trizas sus capacidades de acción pública. Este Estado no es igual al que se construyó en las décadas pasadas: se trata de

un Estado descentralizado, desconcentrado y abierto a la participación popular, pero es un Estado fuerte con capacidad de gobernar y regular el mercado al servicio del bien común. Desde ahí es posible avanzar hacia lo que la Constitución denomina como «la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en una distribución justa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción, y en la generación del trabajo digno y estable». Hemos podido bloquear la privatización de los recursos naturales no renovables del país; hemos impulsado el paradigma del buen vivir sobre las recetas tradicionales del crecimiento y desarrollo; hemos profundizado la estructura de derechos sociales y la posibilidad de la participación social; hemos delineado el horizonte del derecho universal a la seguridad social y sobre todo de las personas que tienen a cargo el trabajo no remunerado del hogar; dimos paso al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y de las organizaciones, pueblos, y nacionalidades como sujetos de derecho; introdujimos un amplísimo empoderamiento de los migrantes; la gratuidad de la educación superior; la primacía del poder civil sobre el actor militar; y la profundización del sufragio universal. La lista es larga. Quizá rescato solo algunos elementos.

La Constitución nos traza un horizonte pero no resuelve los problemas del país de modo automático. Es un punto de partida y no de llegada como cree cierta izquierda dogmática que piensa que toda la receta del cambio y la felicidad están contenidas en las páginas del texto y que solo alcanza con aplicar lo escrito. No es así. La verdadera lucha política empezó una vez aprobado el texto constitucional en medio de un proceso de transición institucional que suponía aprobar una serie de leyes para dar forma material a los principios constitucionales. La política no desaparece ni se licua en un texto constitucional. No por casualidad, el tránsito posconstituyente ha sido más tenso y conflictivo que el propio proceso constituyente. No nos olvidemos que, por aprobar una ley que mandaba la Constitución –la Ley de Servicio Público–, las fuerzas más retardatarias del país se movilizaron de modo violento contra el gobierno y pusieron en vilo a la democracia. Eso fue lo que pasó el 30 de septiembre de 2010.

Sin un cambio constitucional en el marco de un proceso constituyente, habría sido mucho más difícil avanzar, pero el camino de la transformación es todavía largo y dependerá de si tenemos la posibilidad de seguir disputando el cambio de poder en el país.

¿Qué políticas ha implementado su gobierno para reducir la desigualdad?

América Latina ostenta el nefasto título de ser la región más desigual del mundo, y los países andinos son la parte más desigual de esa región. Por eso fue una locura aplicar el modelo neoliberal, que supuestamente se basaba en la competencia y en la liberación del mercado, en países como el Ecuador durante las últimas décadas. ¿De qué competencia se hablaba? Eso fue una masacre. Estamos reduciendo enormemente la desigualdad,

y por ende la pobreza, haciendo cuatro cosas. En primer lugar, que los más ricos paguen más impuestos. Tenemos un sistema impositivo mucho más progresivo y hemos logrado que la gente, ahora sí, pague impuestos, habiéndose más que duplicado la recaudación tributaria. Estos recursos, junto a los ingresos petroleros y lo que ahorramos cuando aliviarnos el peso de la deuda, los destinamos a educación, salud, etcétera. En segundo lugar, hemos garantizado la igualdad de oportunidades. La gente ya no tiene que pagar para curarse o por la educación, gastos importantes para los pobres. Antes se cobraban 25 dólares de matrícula por chico, ahora la educación es absolutamente gratuita al igual que los libros y uniformes.

En tercer lugar, optamos por gobernar los mercados y mejorar el sistema laboral. El mercado es una realidad económica que no podemos obviar, pero creer que todo lo debe asignar el mercado es otra cosa. La acción colectiva tiene que gobernar esos mercados. Estamos acabando con formas de explotación laboral como la tercerización, que suponía que a través del uso de la externalización, se generalizaran prácticas como el impago del salario mínimo, la no afiliación al seguro social y la imposición de jornadas de trabajo extenuantes. Estamos mejorando los salarios reales y con ello el ingreso familiar, que ahora casi iguala el valor de la canasta básica de consumo. El ingreso familiar medio estaba en torno al 60-65 por 100 de esta última antes de nuestro gobierno; en la actualidad alcanza el 93 por 100, el porcentaje más alto de la historia del país. Incluso pulverizamos la teoría económica ortodoxa, que afirma que para generar más empleo han de bajar por fuerza los salarios reales: aquí ha mejorado el salario real sustancialmente y tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de la región: 5 por 100, un poco menos. En cuanto a calidad del empleo, nos esforzamos para asegurar el cumplimiento por parte de las empresas de todas sus obligaciones laborales. Mientras aumentamos los salarios reales, bajamos la remuneración al capital. Aquí, el gobierno que subía en unos pocos dólares el salario básico era tachado de demagogo, de populista, mientras que nadie se sorprendía ante unas tasas de interés del 24-45 por 100. Hemos reducido drásticamente estas; ahora están en el 8-9 por 100 para el sector corporativo.

Finalmente, distribuimos adecuadamente el acervo social. Regalábamos el petróleo: antes del gobierno de Palacio, las compañías transnacionales se llevaban 85 de cada 100 barriles que extraían y nos dejaban 15; ahora, tras la renegociación de los contratos petroleros, la relación se ha invertido. Otro ejemplo: la crisis bancaria de 1999-2000 hizo que el Estado se convirtiera en propietario de muchas empresas, ya que no se habían ejecutado las garantías existentes que nosotros ejecutamos. Sólo con un grupo, el de los Isaías, recuperamos aproximadamente 200 empresas. Cualquier otro gobierno las habría privatizado de nuevo para que acabaran en las mismas manos de siempre. Nosotros hemos facilitado mediante la financiación de la banca pública que los propios trabajadores puedan comprar, totalmente o en parte, esas empresas.

Usted ha mencionado un incremento en la recaudación fiscal, ¿cómo lo lograron?

Una mezcla de credibilidad, controles e incentivos. Yo vengo de Guayaquil, donde tenemos un dicho: «El mono sabe a qué palo trepa». Los empresarios, los banqueros, sabían que si no pagaban impuestos, como tenían a sus amigos en el gobierno, no pasaba nada. Cuando vieron que había un gobierno al que no podían dominar empezaron a pagar impuestos. Por otro lado, se han perfeccionado sustancialmente los controles y el Servicio de Rentas Internas ha mejorado muchísimo sus recursos humanos. En tercer lugar, los incentivos. Por ejemplo, al introducir deducciones en el impuesto sobre la renta por los gastos de educación, salud y vivienda matamos dos pájaros de un tiro: antes pagaba lo mismo un padre de familia con seis hijos que ganaba 20.000 dólares anuales que un soltero que ganaba lo mismo. Hoy, gracias a las deducciones mencionadas, el sistema es mucho más justo, pero además ahora todo el mundo pide factura para justificar su deducción, mediante lo cual hemos mejorado mucho la recaudación tributaria de los profesionales independientes, como médicos o dentistas, así como la derivada de contratos de arrendamiento de vivienda, etcétera. Otro ejemplo es el del sector del banano, que facturaba 600 millones de dólares anuales y pagaba al fisco un millón, lo cual era ridículo. Optamos por que pagaran por anticipado su deuda tributaria mediante la introducción de una nueva fórmula para calcular por módulos esta: quien deseara poner en duda este importe, lo cual sería una vergüenza porque significaría que estaba perdiendo dinero vendiendo bananos, optaba automáticamente por que se le hiciese una auditoría. Ha habido muchas otras reformas que han permitido que se recauden más impuestos.

Volviendo a los problemas de desarrollo, ¿qué propone para equilibrar la explotación de los recursos naturales del Ecuador preservando su increíble diversidad ecológica?

Es una locura decir no a los recursos naturales, que es lo que propone una parte de la izquierda: no al petróleo, no a la minería, no al gas, no a la energía hidroeléctrica, no a la construcción de carreteras. Es una izquierda infantil, funcional para la derecha. No sé dónde dijeron «no» los representantes del socialismo clásico como Marx, Engels, Lenin, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro mismo, a la minería o a los recursos naturales. Eso es una novelería, pero ahora es como si fuera parte fundamental del discurso de izquierda. Y es mucho más peligroso cuando lo propone gente que, supuestamente, habla tu mismo lenguaje. Con tantas restricciones no habrá proyecto político de esa izquierda que funcione

No podemos perder de vista que el principal objetivo de un país como Ecuador es eliminar la pobreza. Para eso necesitamos nuestros recursos naturales. Pero aquí hay gente que está dispuesta a generar más pobreza manteniendo los recursos naturales bajo tierra, o que consideran que la pobreza es parte del folclor: que sigan muriendo los niños en nuestras

regiones centrales de gastroenteritis, que la esperanza de vida siga siendo de 35 años. Eso es criminal. Y no sólo eso; si se fija usted en los procesos exitosos de desarrollo capitalista, países como Corea del Sur, Taiwán o Singapur impusieron grandes dosis de explotación laboral durante mucho tiempo hasta lograr crear el talento humano, la ciencia y la tecnología necesarios para impulsar el desarrollo. Gracias a sus recursos naturales, América Latina no tiene que aguantar esa explotación laboral. Por ejemplo, acabamos de escalar 16 puestos en el *ranking* de competitividad del Foro Económico Mundial. Yo no creo mucho en esos *rankings* porque se basan en una mezcla de ideología y cuestiones técnicas (liberación de mercado, flexibilidad del mercado laboral, etcétera), pero nosotros adelantamos 16 puestos, básicamente, porque aquí han mejorado las comunicaciones y la infraestructura. Eso lo hemos podido hacer, en parte, gracias a los recursos naturales. Los países que no han contado con ellos han recurrido habitualmente a la explotación de su fuerza de trabajo. Eso es inaceptable. No lo vamos a permitir y tampoco tenemos por qué hacerlo. Debemos explotar nuestros recursos naturales, pero tenemos que hacerlo bien.

Pero ha habido muchos desastres en relación al petróleo y la minería...

Por supuesto. Pero una cosa es que haya habido malos cantantes y otra que la canción sea mala. Este es uno de esos argumentos falaces de esa izquierda: como hemos hecho mal las cosas tenemos que seguir haciéndolas mal. Cualquier cosa mal utilizada es una maldición: el turismo sexual que se practica en ciertos países de Asia o el de apostar y jugar típico de Las Vegas, la agricultura si se utilizan productos químicos o plantas importadas que perjudiquen a las plantas nativas, pero puede haber un buen turismo y una buena agricultura. Por supuesto que aquí el petróleo causó mucho daño y que la minería ha destrozado países, pero no hay por qué hacer mal las cosas. El primer proyecto iniciado y completado por nuestro gobierno, en Pañacocha, en la Amazonía, incluye varias alternativas para el desarrollo limpio. Con una buena explotación de los recursos naturales hasta beneficiamos a la naturaleza, al menos de dos formas. En primer lugar, así como la riqueza atenta contra el medio ambiente por el consumo de energía, la pobreza también lo deteriora de otros modos. Yo no le puedo decir a una familia que vive junto a un bosque que no lo tale. Si combatimos la pobreza, conservamos el medio ambiente. Y en segundo, hay una serie de engaños: por ejemplo, que el petróleo destruye la selva. ¿Qué es lo que más perjudica a la selva? La expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Para evitar eso tenemos que dar alternativas de trabajo e ingresos. Que la minería envenena el agua, ¡mentira! La principal fuente de contaminación del agua son las aguas residuales. Por ejemplo, la ciudad de Quito, la capital de la República, todavía arroja sus aguas residuales al río Machángara, ya totalmente contaminado. Para invertir ese proceso necesitamos centenas de millones de dólares. Podemos obtener esos recursos de la minería. Es decir, la explotación adecuada de los recursos naturales puede ayudar a conservar la naturaleza sin destruirla.

En diciembre de 2007, su gobierno lanzó la iniciativa Yasuní-ITT, para evitar que se explotaran los yacimientos de petróleo que hay bajo el Parque Nacional de Yasuní situado en la Amazonía a cambio de una compensación. ¿Podría explicarnos que ideas laten tras esta disposición?

Nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo probadas del país en el Yasuní-ITT, cerca de 900 millones de barriles. Eso tiene un valor actual de 14.000 millones de dólares aproximadamente, que el pueblo necesita para salir de la pobreza. Estamos dispuestos a renunciar a ellos para seguir protegiendo ese bien de libre acceso que es el medio ambiente. Pero tienen que compensarnos. No exigimos los 14.000 millones, pero sí al menos una parte. ¿Cómo estamos calculando esa parte? Si se extrajera ese petróleo, emitiría más de 400 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera. Que nos paguen el valor de esas toneladas en el mercado de emisiones de carbono. Esto es perfectamente compatible con lo que se llama el concepto de emisiones netas evitadas. Kyoto tiene una lista de compras de lo que hay que compensar –para la deforestación existe el mecanismo UN-REDD, por ejemplo–, y cada vez hay más mecanismos, aunque no se llega al concepto integrador de emisiones netas evitadas, que es lo que se tiene que compensar.

La acción internacional coordinada contra el cambio climático parece hoy menos probable que hace diez o veinte años. ¿Cree que hay alguna forma de revitalizar este movimiento?

Al final es un problema político. En cuanto hay crisis, ¿en función de quién se actúa, de los seres humanos o del capital? Mire España: hay plata para salvar a los bancos y no la hay para las casas de las familias. A escala global, es el Tercer Mundo el que genera los bienes ambientales que consumen los países del Primer Mundo. Imagínese por un instante que fuera al revés, que fuéramos nosotros los que contamináramos el mundo y que la selva amazónica estuviera en Estados Unidos y Europa. Nos hubieran invadido para exigirnos compensación en nombre de la justicia, de los principios civilizatorios, del derecho internacional. Pero ellos son los fuertes, los que tienen ejércitos, misiles, etcétera. ¿Por qué tendrían que compensarnos? Mientras no cambien las relaciones de poder habrá mucha retórica y pocas acciones. Hay algunos muy entusiastas que dicen que con estos procesos que se están produciendo en América Latina y en otros lugares, desde el Sur se cambiarán esas relaciones de poder. Yo creo que se equivocan: todavía nos falta mucho para incidir en ellas a escala mundial. Eso lo van a cambiar los ciudadanos del Norte. Por eso los movimientos de los indignados y de Occupy Wall Street han suscitado tantas esperanzas, porque suponen un despertar de los ciudadanos del Primer Mundo. Una vez que ellos se rebelen contra esas estructuras vigentes, se bajará de la retórica a los hechos para que en verdad haya compromisos que apuesten por evitar el cambio climático y conservar el único planeta que tenemos.

¿Qué ideas inspiran sus políticas universitarias y qué pretenden conseguir con ellas?

Para poder responder con sentido esta pregunta es indispensable contextualizarla. Ecuador ha vivido una triple crisis producto de la ausencia de la gestión de un conocimiento emancipador por parte de sus elites económicas e intelectuales: crisis de su modo de acumulación y re-distribución, crisis de la calidad de su democracia y crisis de sostenibilidad ambiental. Podríamos señalar que lo que se ha vivido es resultado de un fracaso cognitivo. Es decir, el problema radica en el sistema que genera y gestiona el conocimiento y en su falta de conexión con las necesidades del país. Por ello, uno de los ejes programáticos nodales del gobierno es la transformación de la educación superior, la ciencia y la tecnología.

Tenemos clara conciencia de que el patrón de especialización de la economía ecuatoriana tiene límites estructurales. Así, por más bonanza que experimenten los precios de las *commodities*, nuestro modelo primario exportador no nos garantiza ni independencia alguna ni soberanía económica en el mediano y largo plazo. Los países emergentes que han tenido éxito en la superación de la pobreza y la desigualdad, tarde o temprano apostaron por una inversión que pretendía desarrollar bienes y servicios con alto valor en conocimiento agregado.

Nosotros, los países del Sur, vivimos una nueva dependencia frente al conocimiento del Norte. La izquierda tiene que tener claro que la soberanía de un país también depende de una generación de conocimiento que esté ligada a la resolución de los problemas que le aquejan y al cumplimiento de sus utopías. Y esta es la razón por la que hemos establecido una agenda ambiciosa pero profundamente pertinente respecto a lo que se requiere de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Nuestras políticas de educación superior tienen dos dimensiones. Una es social. Aquí se decía que la educación era gratuita pero no lo era: las universidades públicas cobraban y cerca de 1.000 millones de dólares de inversión en educación pública, una gran inversión para un país como Ecuador, iba a los más ricos. En la Constitución de 2008 se declaró la absoluta gratuidad de la educación superior. Los resultados han sido extraordinarios: por ejemplo, la tasa de matriculación de indígenas y de afroecuatorianos ha subido exponencialmente y, en el último examen nacional, de 104.000 estudiantes aproximadamente 15.000 eran jóvenes que pertenecían a familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano, una transferencia monetaria que da el gobierno a las familias de ingresos muy bajos⁶. Ese Bono no lo creamos nosotros, lo tecnificamos; tengo muy claro que las transferencias monetarias, aunque ayudan a enfrentar

⁶ Introducido en 2003 por el gobierno Gutiérrez, tras fusionar dos programas anteriores.

la pobreza, no la resuelven. Es la creación de oportunidades la que contribuye a su superación y el hecho de que ahora esos sectores de la población puedan acceder a la universidad, el hecho de haber democratizado la educación, es un gran cambio en cuanto a las posibilidades de estos grupos. La segunda dimensión es la calidad. Otro de los errores de la izquierda es confundir la democracia con la mediocridad: quieren que todos puedan entrar a la universidad y que el Estado pague por lo que escoja cada uno. Por ejemplo, aquí teníamos 49 facultades de Derecho que nunca habían tenido relación alguna entre sí y licenciaban a cerca de 60.000 abogados para un país como Ecuador. Y se esperaba que siguiéramos subsidiando más facultades de Derecho, más estudiantes. Gracias a la credibilidad y al apoyo popular que tenemos, dijimos «no», y sólo financiamos en función de lo que necesita el país. Esos chicos no están ahí sentados para gastar los impuestos de la sociedad, sino para transformarla.

En octubre de 2010 aprobamos una nueva Ley Orgánica de Educación Superior y se implementaron exámenes de admisión a la universidad. No están diseñados para evaluar conocimientos, sino aptitudes, y los estudiantes pobres y ricos están en igualdad de condiciones para pasar el examen. La nueva Ley también introdujo la evaluación de las universidades. En la primera evaluación, 26 universidades fueron catalogadas en la categoría E, lo que significaba que no eran universidades: aquí un garaje con un pizarrón se llamaba universidad... era un engaño social. A esas 26 se les dio un año y medio para prepararse y, cuando las volvimos a evaluar, 14 no pasaron la evaluación. Entonces las cerramos, un hecho inédito en la historia de América Latina y yo creo que en la historia mundial, más aún cuando lo hemos efectuado con todas las garantías que concede nuestro sistema democrático.

El fortalecimiento del sistema de educación superior tiene que venir de la mano de la generación de las condiciones que permitan la edificación del sistema nacional de innovación social y cubrir aquellos vacíos que en la actualidad tiene el sistema universitario ecuatoriano. Por esta razón, el gobierno planteó en la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, la creación de cuatro nuevas universidades de talla mundial que permitan consolidar la sociedad del conocimiento en nuestro país.

La Universidad de Yachay (cuyo significado es «¡aprende!, ¡conoce!» en lengua kichwa) es la primera ciudad universitaria del conocimiento planificada⁷ tanto en la región como en el país, y su objetivo es producir economías de escala para potenciar la inteligencia colectiva del sistema de innovación del país en articulación con las redes mundiales de conocimiento. En este espacio, además de la universidad, se localizarán los institutos públicos de investigación, los centros de transferencia tecnológica,

⁷ La extensión total de la ciudad del conocimiento Yachay es de 4.300 hectáreas.

y las unidades de investigación y desarrollo de las empresas privadas. Yachay pretende convertirse en un *hub* del conocimiento que construirá redes con el sistema universitario nacional e internacional, pero articulando su modelo de innovación con el aparato productivo y con las necesidades del país y la región. La escisión del sistema de educación superior y del sistema de innovación conduciría a un fracaso rotundo de la apuesta programática de la construcción de la sociedad del conocimiento y de la creatividad. La ciudad del conocimiento Yachay será el espacio nacional en el cual se coordine la interacción de ambos sistemas.

Ecuador, al ser un país megadiverso, cuenta con una ventaja comparativa primordial que es la información contenida en esa biodiversidad. La Universidad de Ikiam (que significa «naturaleza» en lengua shuar) es la universidad regional amazónica, cuyo objetivo es consolidar un centro universitario de prestigio mundial en uno de los laboratorios vivientes más importantes con que cuenta en este momento la humanidad. Nos referimos a la biodiversidad contenida en la Amazonía.

La Universidad Nacional de Educación (UNAE) constituye una de las principales necesidades del sistema educativo nacional. Uno de los mayores errores de las reformas educativas en la historia del Ecuador ha sido la miopía frente a la integralidad del sistema. Usualmente se señala que el problema educativo del país está en las escuelas y en los colegios. No obstante, en el sistema de educación formal el centro de la transformación recae sobre el docente, quien se forma a su vez en el sistema nacional de educación superior. Los institutos técnicos y tecnológicos pedagógicos, así como la mayoría de facultades del sistema universitario, o no cubren la demanda o tienen graves problemas de calidad.

Finalmente, la Universidad de las Artes (UniArtes) pretende consolidar un sistema nacional de cultura y arte que, dando cabida a las expresiones culturales y artísticas que existen en la sociedad, permita incrementar la creatividad media de la población y democratizar el intercambio cultural y artístico en todos los rincones del país para construir el Estado intercultural y plurinacional en ciernes. A escala mundial, la trágica construcción de un sistema «fordista» de producción en serie conllevó la separación entre ciencia y arte. La democracia y el sistema social, educativo y productivo del Ecuador tienen como objetivo la construcción de una sociedad del aprendizaje, del conocimiento y de la innovación social, cuya materialización deberá rearticular socialmente aquella interrelación, que jamás debió quebrarse, entre ciencia y arte.

Sostenemos que en el Ecuador la calidad de la democracia, la transformación del aparato productivo y la sostenibilidad ambiental dependen de la construcción del sistema nacional de innovación y de la transformación del sistema nacional de educación superior. Me atrevería a decir que la emancipación de los pueblos radica en la emancipación social del pensamiento y del conocimiento. Esa es nuestra estrategia programática.

Los movimientos indígenas ecuatorianos han hecho importantes contribuciones a la Revolución Ciudadana pero algunos, como CONAIE, se muestran muy críticos con su gobierno. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ustedes y en qué ha pensado para solucionar estas desavenencias?

Hay que entender la relación de nuestro gobierno con el movimiento indígena a partir de tres momentos. El primero se ubica en la campaña electoral de 2006, cuando nuestra Alianza País hizo diversos acercamientos a la dirigencia indígena de Pachakutik para presentarnos juntos a las elecciones⁸. Hicimos esto a pesar de que sabíamos que el movimiento indígena estaba desprestigiado tras su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, un coronel que llegó al poder en alianza con la izquierda y traicionó todos los principios en los que se basaba esa alianza: se proclamó como el mejor amigo de Bush, siguió apoyando el Plan Colombia, quiso firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nombró a un banquero como ministro de Economía y siguió con el manejo neoliberal de la economía nacional. Pachakutik participó con cuatro ministros en el gabinete de Gutiérrez y, a pesar de que se retiró de la alianza siete meses después, varios dirigentes permanecieron en diversos cargos hasta el último día de ese gobierno. Después de esa experiencia, Pachakutik empezó a percibirse como un partido más del *establishment*.

A pesar de ello, como respetamos la trayectoria política del movimiento indígena, decidimos proponerles ir juntos, Alianza País y Pachakutik, en la papeleta presidencial, que encabezaría el candidato que tuviera más posibilidades de llevarnos al triunfo electoral (lo que definiríamos con ayuda de una encuesta nacional), mientras el otro ocuparía la vicepresidencia. No aceptaron, y algunos sectores se mostraron muy hostiles con nosotros tras ese acercamiento. Algunos dicen que la dirigencia indígena, tras su paso por el gobierno gutierrista, no estaba dispuesta a aceptar un candidato externo al movimiento; puede que sea así, pero yo creo que la dirigencia se estaba alejando de las bases y sabía que aceptar una colaboración con nosotros suponía abrir la agenda política. No aceptaron nuestra propuesta y ahí decidimos que el binomio sería con Lenín Moreno⁹. Fue una decisión que, vista cinco años después, parece muy atinada, porque el vicepresidente ha sido el segundo mandatario de todos los ecuatorianos y no sólo de un sector de la población. Su labor a favor de los discapacitados ha sido excelente y ahora es una figura muy querida en todo el país. En 2006, nosotros pasamos a la segunda vuelta con el multimillonario

⁸ La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) fue fundada en 1986 por más de una docena de organizaciones indígenas que incluían a representantes de la Sierra, la Amazonía y la Costa ecuatorianas. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) fue el vehículo electoral lanzado por los indígenas y otros activistas en 1995; la palabra quechua *pachakutik*, que significa «cambio», «renacimiento», «transformación», fue el nombre de un gobernante inca del siglo xv y se empleó asimismo para designar la oleada de protestas indígenas que barrieron el país en junio de 1990.

⁹ Lenín Voltaire Moreno Garcés (1953), antiguo funcionario, quedó parapléjico en 1998 tras recibir el disparo de unos atacadores.

bananero Álvaro Noboa con casi el 23 por 100 de los votos, y Pachakutik obtuvo en esas mismas elecciones sólo un 2 por 100 de los votos. El pueblo ya no los veía como una fuerza capaz de disputar el cambio.

¿Y el segundo momento?

El segundo momento fue en 2007-2008, en la Asamblea Nacional Constituyente. Alianza País obtuvo 80 de los 130 curules de la Asamblea, una amplia mayoría por sí sola. Sin embargo, debatimos todos y cada uno de los puntos de la agenda indígena, pese a que Pachakutik tenía muy pocos asambleístas. Como parte de ese debate, declaramos el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano. Diez años atrás, en la Asamblea Constituyente de 1998, cuando Pachakutik obtuvo el 10 por 100 de la representación, no pudieron lograr esa declaratoria, cuando eran más fuertes. Nosotros, por el contrario, sabíamos de la legitimidad histórica de esa declaratoria y sostuvimos desde el primer día de la Asamblea la tesis de la plurinacionalidad. Eso no significaba, sin embargo, apostar por la fragmentación del Estado o por el fin de la unidad nacional. La idea siempre ha sido reconocer la diversidad y la diferencia para ser más integrados y cohesionados como nación, no para dar lugar a cualquier autonomía territorial que debilite el Estado nacional. De igual modo se reconocieron los derechos de la naturaleza, la posibilidad de formar circunscripciones territoriales indígenas, el derecho al agua como bien público y la misma idea de la democracia comunitaria.

Claro, los debates en la Constituyente fueron duros en diversos puntos. No aceptamos el consentimiento previo, un mecanismo por el que las comunidades debían autorizar al Estado en caso de que este quisiera usar los recursos estratégicos del país, y eso generó mucho descontento en sectores cercanos al movimiento indígena. Los recursos naturales son de propiedad pública, son bienes comunes, y no podíamos permitir que comunidades pequeñas, por más legitimidad histórica que tuvieran en los territorios, fuesen las que tuvieran la última palabra en materia de su uso. Finalmente, la Constitución incorporó la figura de la «consulta previa» que consta en el Convenio 169 de la OIT¹⁰. En todo caso, en el referéndum para aprobar la Constitución celebrado el 28 de septiembre de 2008, Pachakutik apoyó la tesis del «sí» y ganamos todos con el 63 por 100 del voto popular. A pesar de las diferencias con el movimiento indígena, fue posi-

¹⁰ Referencia al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989, Artículo 15, Cláusula 2, en la que se afirma que: «En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades».

ble compartir muchas tesis –la lucha contra el neoliberalismo, por ejemplo– y avanzar en el diálogo político. Eso fue lo que se acabó más tarde por la intransigencia de algunos de sus dirigentes y su visión parcelada del país. Nosotros gobernamos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y no podemos ceder a las presiones de minorías por justificadas que puedan parecer sus demandas.

El tercer momento se inicia en 2009 con las elecciones generales que se efectuaron en el marco de la nueva Constitución. Aquí vemos dos elementos. Por un lado, se consolidaron ciertas alianzas en determinados territorios con el movimiento indígena, por ejemplo en Imbabura y Chimborazo, dos territorios de elevada población indígena, Alianza País presentó candidatos provenientes de las organizaciones indígenas y triunfó holgadamente. En otros territorios las alianzas no se concretaron, pero establecimos diversas relaciones con dirigentes medios y con las bases indígenas; esa ha sido nuestra estrategia en vistas de la imposibilidad de dialogar con ciertos dirigentes indígenas. Por otro lado, desde 2009 se consolida una visión corporativa y poco flexible de la dirigencia del CONAIE. Ellos estaban acostumbrados a dictar «mandatos» que se supone que los gobiernos debían aceptar por el mero hecho de provenir de ellos. No asumen el debate democrático y no aceptan que cuando el pueblo elige a un partido para que gobierne lo hace en función del programa político que presentó. Ellos creen que sus mandatos son legítimos simplemente porque han sido víctimas. Eso no puede ser.

En los debates sobre la Ley de Aguas, la Ley de Minería y otras leyes, se hace ya imposible debatir con Pachakutik. Su visión es fundamentalista y está muy influenciada por ONG extranjeras, con un discurso ecológico que no logra entender las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. El vicepresidente boliviano acaba de escribir un libro sobre cómo las ONG son corresponsables de la pérdida de soberanía estatal en amplios territorios de la Amazonía¹¹. En Ecuador esa realidad no nos es ajena. En el caso de la Ley de Aguas estábamos de acuerdo en un 80 por 100 del cuerpo legal, pero ellos se cerraron en la idea de que el órgano estatal encargado de dirigir el sector hídrico del país debía estar compuesto sólo por comunidades, comuneros y juntas de agua. ¿Y la legitimidad democrática? ¿Cómo podemos tener un órgano público de regulación de un sector tan importante como el agua sin la presencia política del gobierno del Estado nacional? Aquí hay diferencias conceptuales: nosotros no somos corporativistas; la dirigencia indígena a menudo sólo quiere instituciones controladas por ellos, pero nosotros vamos más allá de esa visión fragmentada del Estado. El resultado fue que, al hacerle Pachakutik el juego a la oposición de derecha de la Asamblea, el Parlamento no aprobó la Ley de Aguas y hoy seguimos con la misma ley aprobada por los neoliberales en la década de 1990, es decir, una ley que no permite al Estado regular el

¹¹ Álvaro García Linera, *Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista*, La Paz, 2012.

sector hídrico. Esto es sólo un ejemplo. Hay otros en los que Pachakutik ha votado siempre con la derecha: no apoyaron la creación del ALBA, no apoyaron la vigencia del SUCRE ni la arquitectura financiera regional¹², acaban de abstenerse sobre el rechazo del escandaloso laudo arbitral emitido recientemente por el CIADI, que obliga al país a pagar más de 2.200 millones de dólares a la petrolera Oxy¹³. Por último, el 30 de septiembre de 2010, cuando hubo un intento de desestabilización democrática, la dirigencia indígena llamó a sus bases a movilizarse contra el presidente y contra su mandato democrático y constitucional. No es fácil dialogar en estas condiciones.

Créame que a mí me pesa tal situación. Yo viví en mi juventud durante un tiempo largo en uno de los territorios indígenas más deprimidos del país. Ahí aprendí algo de kichwa, aprendí el rigor de la vida campesina indígena, hice alfabetización y trabajo político de capacitación a gente que ahora es dirigente de la CONAIE. Entiendo esa problemática y creo que podemos hacer mucho más por esos sectores, pero es difícil dialogar en tales condiciones de estrechez política de miras. Siempre he tratado al movimiento indígena de igual a igual, nada de infantilizar a los actores indígenas ni victimizarlos, como han hecho siempre las ONG y cierta izquierda paternalista, y eso significa que a veces puedo ser duro con ellos, como lo soy con cualquier otro actor. No compartimos la visión del problema indígena como un problema sólo de los indígenas que deba tratarse desde las instituciones indígenas. Ese es el enfoque del multiculturalismo neoliberal que proliferó durante la década de 1990 en América Latina. El problema indígena es de todo el Estado ecuatoriano, y todas las instituciones públicas deben contribuir a resolverlo independientemente de que sean o no dirigidas por indígenas. Desde esa perspectiva hemos dado grandes pasos a favor de la inclusión de los indígenas en la educación, la universidad, la salud, entre otros logros. Donde se han producido las mayores reducciones de la pobreza ha sido entre la población indígena. Pero nos queda mucho por hacer.

¿Cómo respondería a los críticos que, tanto de dentro como de fuera de Ecuador, afirman que su gobierno ha recortado la libertad de prensa?

¡Hay tanta falta de libertad de expresión que se puede decir y publicar todos los días! Uno de los poderes fácticos que siempre ha dominado nuestros países es el poder mediático. Antes, quienes elegían presidentes, quienes dictaban la política, quienes juzgaban, eran los medios de

¹² SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional); divisa virtual y unidad de cuenta común adoptada por los miembros del ALBA y Ecuador en noviembre de 2008.

¹³ En octubre de 2012, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (International Centre for Settlement of Investment Disputes), un organismo del Banco Mundial, ordenó a Ecuador que pagara 1.770 millones de dólares a la compañía petrolera Oxy, más los intereses acumulados, por una disputa contractual de 2006; véase «Ecuador vs. US Oil: Quito loses a round», *FT.com*, 6 de octubre de 2012.

comunicación. Ahora hay gobiernos progresistas con gran credibilidad, legitimidad y apoyo popular –en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela– que ya no se someten a ese poder mediático. Los medios, como saben que están perdiendo sus privilegios, lanzan permanentemente campañas para destruir la reputación y el prestigio de los presidentes y sus gobiernos, para denigrar a sus personas y para boicotear sus proyectos políticos, tanto a escala nacional como internacional. Los seis periódicos nacionales son manejados por seis familias de la oligarquía, que siempre han sido de derechas y han apoyado a las dictaduras. Son negocios tremendamente corruptos, manipuladores, que se han acostumbrado a manejar y someter al gobierno. Como ustedes no conocen la prensa latinoamericana, hay quien se sorprende. Por ejemplo, pensemos en lo que pasó con Murdoch en Inglaterra antes del Informe Leveson: si nosotros hubiéramos hecho la décima parte de lo que hizo el gobierno británico, se hubiera clamado que atentábamos contra la libertad de expresión. Europa y Estados Unidos no entienden que hasta cobrar impuestos a esas empresas aquí lo interpretan como un atentado contra la libertad de expresión. Con la clase de prensa que tiene América Latina, los periodistas que denuncian la corrupción del poder político no son héroes perseguidos por las autoridades políticas, sino que frecuentemente ocurre lo contrario.

En dos casos concretos, un artículo publicado en El Universo por Emilio Palacio tras el fallido intento de golpe de Estado contra usted en septiembre de 2010, y El Gran Hermano, un libro publicado ese mismo año en el que aportaban pruebas de corrupción contra su hermano, usted llevó el caso a los tribunales. Fallaron a su favor pero, retrospectivamente, ¿cree usted que fue sensato demandarles?

En un Estado de derecho como el ecuatoriano no se persigue a los periodistas, se persiguen los delitos. Ese periódico cometió delitos de difamación e injurias diciendo que ordené disparar sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles. ¿Qué pasaría en Inglaterra si un periódico publicara que la Reina es culpable de delitos de lesa humanidad? Allá es inadmisibles, acá es libertad de expresión. La ley prohíbe la difamación, y aquí hay cerca de 12.000 juicios por injurias. Pero en cuanto se demandó por injurias a un periódico y a un periodista, se consideró un atentado contra la libertad de expresión. Por si acaso alguien se hace eco de la noticia, la revista *Vanguardia* ha demandado a nuestro ministro de Relaciones Laborales por haberles acusado de incumplir la legislación en materia de relaciones laborales. Los medios hacen todos los días lo que tanto critican. Sé que hay una discusión sobre si debe penalizarse la injuria o no. Personalmente estoy de acuerdo con penalizar las injurias; no entiendo por qué, si uno va a prisión por no pagar *royalties*, otro que roba la dignidad y la honra a una persona no deba ir preso. Eso es doble moral. Creo que una forma de enfrentarse a este poder mediático –a sus excesos, su corrupción, su mala fe– es aplicando la ley. Y la ley debe ser igual para todos.

Puede que eso sea cierto cuando está en juego una cuestión política importante pero, ¿no sería sensato hacer excepciones en ciertos casos?

En el caso de *El Universo* se agotaron todos los medios. La Constitución obliga, cuando hay una noticia inexacta, a rectificar inmediatamente. Nunca quisieron rectificar. Durante el juicio, en primera instancia, segunda instancia y casación, siempre se les dijo: corrijan el error y se acaba todo, aquí nadie quiere meter preso a nadie ni hacerse millonario con la plata de nadie. Pero así era la soberbia de esa gente, que contaba con la complicidad de los medios internacionales y otros medios nacionales. Por ejemplo, la Universidad de Columbia acaba de condecorar a *El Universo*, diciendo que fue enjuiciado por llamarme dictador. ¡Mentira! Me llamé criminal de lesa humanidad y afirmé que ordené disparar contra un hospital lleno de civiles¹⁴.

Usted ha mencionado a la revista Vanguardia, recientemente inspeccionada por los inspectores de trabajo por incumplir la normativa laboral. Teniendo en cuenta que es un órgano de opinión, ¿no hubo mejor forma de abordar esas infracciones?

Es que no son cosas independientes. Los medios incumplen sus obligaciones laborales porque se creen intocables. La verdad es que yo nunca me enteré de la acción contra la revista *Vanguardia*, ni siquiera el ministro lo sabía. Lo hizo un funcionario de segundo nivel. Porque ya habíamos hecho más de 3.000 inspecciones laborales y más de 300 coactivas, entonces el funcionario dijo: ¿Por qué tengo que hacer una excepción con *Vanguardia*? Incautamos los bienes. Con los otros 300 no pasa nada, pero cuando se incautaron los bienes de una revista que había incumplido sus obligaciones laborales, ¡atentado contra la libertad de expresión! Ya debemos superar ese chantaje. Es una empresa más que incumplió sus obligaciones laborales y la ley debe ser igual para todos. Creer que porque se abre una empresa dedicada a la comunicación ya se está por encima de la ley es un atentado contra el Estado de derecho.

Tras la decisión de su gobierno de conceder asilo a Julian Assange, el gobierno británico amenazó con entrar en la embajada del Ecuador y llevárselo por la fuerza; el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, evidentemente se creía Lord Palmerston¹⁵...

Fue un error garrafal que legitimó aún más la postura del Ecuador.

¹⁴ *El Universo* fue uno de los cinco periódicos galardonados con el María Moors Cabot Prize de 2012 por reportajes sobre América Latina; otro de los ganadores fue Teodoro Petkoff, cuyo periódico, *Tal cual*, suele comparar al presidente venezolano con Hitler.

¹⁵ Henry John Temple, Vizconde de Palmerston (1784-1865), fue un político británico que ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido. Es conocido por su frase: «Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes» [N. del T.].

¿Ofreció el gobierno ecuatoriano a los fiscales suecos la posibilidad de interrogar a Assange? De ser así, ¿qué respondieron los suecos?

Es un punto esencial que deben conocer el pueblo británico y el pueblo sueco. Además de desprestigiar a nuestro gobierno, al presidente, por no habernos sometido a los poderes imperiales, diciendo que aquí hay un dictador y todo eso, se quiso imponer la versión de que nosotros queríamos obstaculizar a la justicia sueca. ¡Mentira! Agotamos meses de conversaciones para que, si Assange era extraditado a Suecia, se garantizara que no sería extraditado a un tercer país. Propusimos que el fiscal sueco interrogara a Assange –se le reclama para ser interrogado, todavía no está acusado de nada– en la embajada del Ecuador en Londres. Es algo que permite la ley sueca y que ya se ha hecho en otros casos; hasta por video se puede hacer. Tal vez con una buena dosis de prepotencia dijeron «no, porque no me da la gana». No querían salidas para que prosiguiera la investigación del supuesto delito, y como no nos garantizaban que Assange no sería extraditado a un tercer país si iba a Suecia, vimos claros indicios de persecución política y riesgo para su vida, y decidimos otorgarle asilo ejerciendo nuestra soberanía. El pueblo británico y el pueblo sueco deben tener muy claro que aquí nadie quiere obstaculizar a la justicia sueca; dimos todas las facilidades, fueron ellos los que no quisieron.

En cierto modo, quien posibilitó toda la operación «Cablegate» de Wikileaks fue Bradley Manning. ¿Qué se puede hacer para llamar la atención de la opinión pública sobre su situación?

Si aquí en Ecuador hubiéramos hecho la décima parte de lo que le están haciendo al soldado Manning, dirían que somos dictadores, autoritarios, incivilizados. Y allá no se dice nada. Tenemos serias presunciones de que no se está cumpliendo el principio del debido proceso, de que se está atentando contra los derechos de Manning, pero este no ha solicitado asilo y no podemos interferir en un asunto que, en ese caso, es un asunto interno de Estados Unidos. Los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y las Naciones Unidas han intentado hacer algo y se han enfrentado a grandes obstáculos. Yo no justifico lo que hizo Manning, ni siquiera todo lo que ha hecho Assange, pero lo que buscamos es que se aplique el debido proceso, que no haya persecución política. Ecuador no acepta la pena de muerte, cree que es un atentado contra los derechos humanos; así que no podemos permitir que nadie que haya buscado asilo en Ecuador se vea expuesto a la pena de muerte por delitos políticos en Estados Unidos. También vemos grandes contradicciones. Se puede decir que Manning robó la información, pero Assange no la robó. Entonces, ¿de qué se acusa a Assange? De haber difundido información secreta de Estados Unidos. Pero, ¿acaso los medios que compraron esa información no la difundieron también? *The New York Times*, *El País* de España, todos esos periódicos, ¿por qué no se incoan procesos contra ellos? De nuevo es una cuestión de poder. Assange es un simple ciudadano, los otros son poderes mediáticos.

¿Había revelaciones importantes sobre Ecuador en los cables filtrados?

En un principio, de cerca de 3.000 cables de Wikileaks sobre Ecuador, la prensa corrupta publicó lo que creía que no iba a hacer daño. Después descubrimos muchas cosas que acusaban a esa misma prensa; el propio embajador estadounidense pidió, cuando fueron a buscarlo los medios de comunicación al inicio de nuestro gobierno para quejarse de que no había libertad de expresión, que no mintieran. Los cables de Wikileaks también demuestran que los grupos mediáticos, Teleamazonas, que es del Banco Pichincha, TC Televisión y Gamavisión, que pertenecían a los Isaías, llegaron a un acuerdo: no nos saquemos los trapos sucios. Si a usted le preocupa la libertad de prensa, revise los cables de Wikileaks y verá cómo la propia embajada dice que aquí hay absoluta libertad de prensa, que hay excesos y abusos de los medios y una componenda entre estos para ocultar la información que les perjudica¹⁶.

En el ámbito de la política exterior, Ecuador se ha destacado al decidir no participar en la Organización de Estados Americanos a menos que se readmita a Cuba. ¿Qué idea había detrás de esta política?

¿Cómo podemos llamar Cumbre de las Américas a una cumbre sin Cuba? Cuba fue deliberadamente excluida de la OEA porque allí «no hay democracia». No hay democracia liberal como la entiende Estados Unidos. Pero el Chile de Pinochet, una dictadura militar sangrienta, que derrocó a un gobierno democrático civil, nunca fue excluido de la OEA. Hasta para eso tienen un doble rasero. Como bien dice Fidel Castro, la OEA ha sido el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Y a estas alturas no podemos tolerar esta situación en América Latina. Por eso Ecuador dijo que no vamos a ninguna Cumbre de las Américas mientras Cuba no esté presente. No fuimos a la Sexta Cumbre en Cartagena, presentamos nuestra protesta; se discutió el tema de Cuba y 31 de los 33 países –con la excepción de Canadá y Estados Unidos dijeron que en la próxima Cumbre de las Américas ha de estar presente Cuba. Yo creo que eso marcó un punto importante en la historia de América Latina. Pasamos del Consenso de Washington al consenso sin Washington.

¹⁶ Por ejemplo, en febrero de 2009 se afirmaba en un cable de la embajada de Estados Unidos en Quito que Correa había dicho, «no sin algo de razón», que los medios «estaban de acuerdo con las elites políticas y económicas» y constituían, por lo tanto, un obstáculo para la agenda de cambio de su Revolución Ciudadana. Se señalaba que «los medios privados se han defendido solidariamente de los ataques y siguen informando y criticando a Correa y su gobierno». Véase el cable 09QUITO108, que se puede consultar en [wikileaks.org](http://wikileaks.org/cable/2009/02/09QUITO108.html) [http://wikileaks.org/cable/2009/02/09QUITO108.html].